

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 237

FECHA: 21 de Marzo de 2016

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
AMÉRICA LATINA	LAS CRISIS DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA	2
ARGENTINA	MÁS DEUDA Y MÁS AJUSTE EN LA AGENDA DEL GOBIERNO DE MACRI	4
COLOMBIA	PLAN COLOMBIA, PLAN DE RECOLONIZACION	5
GUATEMALA	“CON LA MINERÍA LLEGA LA REPRESIÓN Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”	8
	INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN RESISTENCIA OPTAN POR CREAR SU PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA LIBERACIÓN	10
	AMBIENTALISTA GUATEMALTECO ES ASESINADO EN ATAQUE ARMADO	11
HONDURAS	OTRO ATENTADO CONTRA INTEGRANTES DE COPINH	12
MÉXICO	ESTADOS UNIDOS: COLABORACIÓN DE FACTO CON EL NARCO	13
NICARAGUA	NICARAGUA RECIBE MÁS REMESAS DE ESPAÑA	14
PANAMÁ	LAS REFORMAS DE LA PARTIDOCRACIA	15
VENEZUELA	CRONICAS DE LA VENEZUELA DEL ALIENTO CONTENIDO	16

AMÉRICA LATINA

LAS CRISIS DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

Se puede decir que hay dos izquierdas en América Latina y que ambas padecen de crisis, cada una a su manera. Una es la que llegó a los gobiernos, empezó procesos de democratización de las sociedades y de salida del modelo neoliberal y que hoy se enfrenta a dificultades –de distinto orden, desde afuera y desde adentro– para dar continuidad a esos procesos. La otra es la que, aun viviendo en países con continuados gobiernos neoliberales, no logra siquiera constituir fuerzas capaces de ganar elecciones, llegar al gobierno y empezar a superar el neoliberalismo.

La izquierda posneoliberal ha tenido éxitos extraordinarios, aún más teniendo en cuenta que los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad se han dado en los marcos de una economía internacional que, al contrario, aumenta la pobreza y la desigualdad. En el continente más desigual del mundo, cercados por un proceso de recesión profunda y prolongada del capitalismo internacional, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han disminuido la desigualdad y la pobreza, han consolidado procesos políticos democráticos, han construido procesos de integración regional independientes de Estados Unidos y han acentuado el intercambio Sur-Sur.

Mientras que las otras vertientes de la izquierda, por distintas razones, no han logrado construir alternativas a los fracasos de los gobiernos neoliberales, de las cuales los casos de México y de Perú son los dos más evidentes, mostrando incapacidad, hasta ahora, de sacar lecciones de los otros países, para adaptarlas a sus condiciones específicas.

¿En qué consiste la crisis actual de las izquierdas que han llegado al gobierno en América Latina? Hay síntomas comunes y rasgos particulares a cada país. Entre ellos están la incapacidad de contrarrestar el poder de los monopolios privados de los medios de comunicación, aun en los países en los que se ha avanzado en leyes y medidas concretas para quebrar lo que es la espina dorsal de la derecha latinoamericana. En cada uno de esos países, en cada una de las crisis enfrentadas por esos gobiernos, el rol protagónico ha sido de los medios de comunicación privados, actuando de forma brutal y avasalladora en contra de los gobiernos, que han contado con éxitos en su gestión y un amplio apoyo popular.

Los medios han ocultado los grandes avances sociales en cada uno de nuestros países, los han censurado, han tapado los nuevos modelos de vida que los procesos de democratización social han promovido en la masa de la población. Por otro lado, destacan problemas aislados, dándoles proyecciones irreales, difundiendo incluso falsedades, con el propósito de deslegitimar las conquistas logradas y la imagen de sus líderes, sea negándolas, sea intentando destacar aspectos secundarios negativos de los programas sociales.

Los medios han promovido sistemáticamente campañas de terrorismo y de pesimismo económico, buscando bajar la autoconfianza de las personas en su propio país. Como parte específica de esa operación están las sistemáticas denuncias de corrupción, sea a partir de casos reales a los que han dado una proporción desmesurada, sea inventando denuncias por las cuales no responden cuando son cuestionados, pero los efectos ya han sido producidos. Las reiteradas sospechas sobre el accionar de los gobiernos producen, especialmente en sectores medios de la población, sentimientos de crítica y de rechazo, a los que pueden sumarse otros sectores afectados por esa fabricación antidemocrática de la opinión pública. Sin ese factor, se puede decir que las dificultades tendrían su dimensión real, no serían transformadas en crisis políticas, movidas por la influencia unilateral que los medios tienen sobre sectores de la opinión pública, incluso de origen popular.

No es que sea un tema de fácil solución, pero no considerar como un tema fundamental a enfrentar es subestimar el nivel en que la izquierda está en mayor inferioridad: la lucha de las ideas. La izquierda ha logrado llegar al gobierno por el fracaso del modelo económico neoliberal, pero ha recibido, entre otras herencias, la hegemonía de los valores neoliberales diseminados en la sociedad. “Cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas”, según Perry Anderson. Tendencias a visiones pre-gramscianas en la izquierda han acentuado formas de acción tecnocráticas, creyendo que hacer buenas políticas para la gente era suficiente

como para producir automáticamente conciencia correspondiente al apoyo a los gobiernos. Se ha subestimado el poder de acción de los medios de información en la conciencia de las personas y los efectos políticos de desgaste de los gobiernos que esa acción promueve.

Un otro factor condicionante, en principio a favor y luego en contra, fue el relativamente alto precio de los commodities durante algunos años, del que los gobiernos se aprovecharon no para promover un reciclaje en los modelos económicos, para que no dependieran tanto de esas exportaciones. Para ese reciclaje habría sido necesario formular y empezar a poner en práctica un modelo alternativo basado en la integración regional. Se ha perdido un período de gran homogeneidad en el Mercosur, sin que se haya avanzado en esa dirección. Cuando los precios bajaron, nuestras economías sufrieron los efectos, sin tener como defenderse, por no haber promovido el reciclaje hacia un modelo distinto.

Había también que comprender que el período histórico actual está marcado por profundos retrocesos a escala mundial, que las alternativas de izquierda están en un posición defensiva, que de lo que se trata en este momento es de salir de la hegemonía del modelo neoliberal, construir alternativas, apoyándose en las fuerzas de la integración regional, en los Brics y en los sectores que dentro de nuestros países se suman al modelo de desarrollo económico con distribución de renta, con prioridad de las políticas sociales.

En algunos países no se ha cuidado debidamente el equilibrio de las cuentas públicas, lo cual ha generado niveles de inflación que han neutralizado, en parte, los efectos de las políticas sociales, porque los efectos de la inflación recaen sobre asalariados. Los ajustes no deben ser transformados en objetivos, pero si en instrumentos para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y eso es un elemento importante del éxito de las políticas económicas y sociales.

Aunque los medios de información hayan magnificado los casos de corrupción, hay que reconocer que no hubo control suficiente de parte de los gobiernos del uso de los recursos públicos. El tema del cuidado absoluto de la esfera pública debe ser sagrado para los gobiernos de izquierda, que deben ser los que descubran eventuales irregularidades y las castiguen, antes de que lo hagan los medios de información. La ética en la política tiene que ser un patrimonio permanente de la izquierda, la transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos tiene que ser una regla de oro de parte de los gobiernos de izquierda. El no haber actuado siempre así hace que los gobiernos paguen un precio caro, que puede ser un factor determinante para poner en riesgo la continuidad de esos gobiernos, con daños gravísimos para los derechos de la gran mayoría de la población y para el destino mismo de nuestros países.

Por último, para destacar algunos de los problemas de esos gobiernos, el rol de los partidos en su condición de partidos de gobierno nunca ha sido bien resuelto en prácticamente ninguno de esos países. Como los gobiernos tienen una dinámica propia, incluso con alianzas sociales y políticas con la centro izquierda, en varios casos, esos partidos deberían representar el proyecto histórico de la izquierda, pero no han logrado hacerlo, perdiendo relevancia frente al rol preponderante de los gobiernos. Se debilitan así la reflexión estratégica, más allá de las coyunturas políticas, la formación de cuadros, la propaganda de las ideas de la izquierda y la misma lucha ideológica.

Nada de eso autoriza a hablar de "fin de ciclo". Las alternativas a esos gobiernos están siempre a la derecha y con proyectos de restauración conservadora, netamente de carácter neoliberal. Los gobiernos posneoliberales y las fuerzas que los han promovido son los elementos más avanzados que la izquierda latinoamericana dispone actualmente y que funcionan también como referencia para otras regiones de mundo, como España, Portugal y Grecia, entre otros.

Lo que se vive es el final del primer periodo de la construcción de modelos alternativos al neoliberalismo. Ya no se podrá contar con el dinamismo del centro del capitalismo, ni con precios altos de las commodities. Las clave del paso a un segundo período tienen que ser: profundización y extensión del mercado interno de consumo popular; proyecto de integración regional; intensificación del intercambio con los Brics y su Banco de Desarrollo.

Además de superar los problemas apuntados anteriormente, antes que todo crear procesos democráticos de formación de la opinión pública, dar la batalla de las ideas, cuestión central en la construcción de una nueva hegemonía en nuestras sociedades y en el conjunto de la región.

Hay que construir un proyecto estratégico para la región, no solo de superación del neoliberalismo y del poder del dinero sobre los seres humanos, sino de construcción de sociedades justas, solidarias, soberanas, libres, emancipadas de todas las formas de explotación, dominación, opresión y alienación.

Fuente: Emir Sader, ALAI

ARGENTINA

MÁS DEUDA Y MÁS AJUSTE EN LA AGENDA DEL GOBIERNO DE MACRI

El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitres, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegítima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un Gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el Gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitres y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza

la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitres, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del Gobierno de Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante el conflicto, represión y protocolo de seguridad.

Fuente: Julio C. Gambina. Rebelión

COLOMBIA

PLAN COLOMBIA, PLAN DE RECOLONIZACION

El 4 de febrero pasado se reunieron en Washington Juan Manuel Santos y Barack Obama, para conmemorar los quince años de puesta en marcha del mal llamado Plan Colombia, un verdadero programa de recolonización de nuestro país por parte de los Estados Unidos. Si, la recolonización a doscientos años de la primera independencia es lo que ha significado el mencionado plan y eso fue lo que celebraron con bombos y platillos los amos y sus lacayos. No de otra forma pueden entenderse las palabras, plenas de sumisión y entreguismo vergonzoso de Juan Manuel Santos, cuando afirmó: "Hoy es un día para agradecer. Hoy vuelvo a Washington para dar las gracias al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que han dado a Colombia en los últimos 15 años, y para proyectar nuestra cooperación en los años que vienen".

Programa contrainsurgente

Desde el momento en que se concibió el Plan Colombia en 1999, durante el segundo mandato de Bill Clinton (1991-1999), quedó claro que este era un programa contrainsurgente, cuyo objetivo principal consistía en fortalecer las fuerzas represivas del Estado colombiano, seriamente debilitadas por los golpes de la insurgencia de las FARC en la segunda mitad de la década de 1990. Mientras se efectuaban los diálogos en el Caguán, el gobierno del conservador Andrés Pastrana, como éste lo ha reconocido después, impulsaba una reingeniería de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de sabotear esos diálogos y asumir una nueva fase de la guerra, de tierra arrasada, bajo la tutela de los Estados Unidos.

El Plan fue elaborado en los Estados Unidos, tanto que su redacción original fue en inglés, y en su aprobación desempeñaron un papel principal los productores de armas y artefactos bélicos, puesto

que ellos serían los principales beneficiarios, como en efecto lo han sido, de la “ayuda” militar de los Estados Unidos.

Debe resaltarse el carácter contrainsurgente del Plan Colombia, aunque en principio, antes de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se le presentara como un instrumento en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, la política contrainsurgente, en la que coincidieron los cipayos criollos y sus amos estadounidenses, se convertía en el medio para recolonizar a Colombia. Esto es necesario recalcarlo, porque a quince años del comienzo del Plan Colombia, gran parte de los balances lo siguen examinando como si hubiera sido diseñado para enfrentar la producción y comercialización de narcóticos. Quienes se centran en este asunto señalan que ha sido un fracaso, porque en Colombia se sigue produciendo cocaína que fluye rauda hacia el exterior. Esto es desviar la atención sobre la magnitud de los crímenes que se derivan de la aplicación del Plan Colombia, un resultado directo de la contrainsurgencia y de la nueva colonización.

En el caso de la “guerra contra las drogas”, es dudoso suponer que a Estados Unidos le interesa que se acabe la oferta de narcóticos, ya que eso es un pretexto permanente que justifica sus intervenciones en diversos países del mundo (Colombia, México, Afganistán, para recordar algunos de los ejemplos emblemáticos). Por ello, no sorprende que luego de quince años Colombia siga siendo el primer productor mundial de cocaína y los negocios alrededor de la misma se hayan expandido por el sur y el centro del continente.

La trampa analítica consiste en aceptar que el Plan pretendía solucionar el problema del narcotráfico, lo que es quedarse en el terreno de las apariencias, sin ir al fondo de la cuestión, y creer a pie juntillas lo que literalmente se dice en los documentos del Plan.

Recolonización en marcha

Siempre que Estados Unidos interviene militarmente en algún lugar del mundo, y lo hace cada vez con más frecuencia, piensa en los beneficios que puede obtener, porque recordemos que esa potencia imperialista “no tiene amigos sino intereses”. Desde luego, Colombia no podía ser la excepción.

En un momento en que se debilitaba su presencia en América Latina, y particularmente en América del Sur, por la irrupción de Hugo Chávez en la política continental, Colombia se convirtió en el Israel de la región, en su principal base militar (con presencia no en siete bases, como se suele decir, sino en más de 40 lugares del territorio colombiano). Eso explica la inversión militar en el país, que alcanzó sus niveles más altos de toda su historia, hasta convertirnos en el tercer país del mundo con mayor “ayuda militar” de los Estados Unidos.

Dicha “ayuda” benefició directamente a empresas de los Estados Unidos, en la medida en que los dólares entregados a los gobiernos colombianos se destinan a comprar helicópteros, aviones, tanques, preparar personal para conducirlos y mantenerlos, abastecerse de repuestos, adquirir químicos para la aspersión de glifosato, todo lo cual es vendido por empresas de ese país.

La intervención estadounidense logró que se aprobara un indigno tratado de libre comercio, que abrió por completo las puertas del país a las inversiones de las multinacionales. Se consolidó el neoliberalismo en todas las actividades de la vida nacional, se privatizaron las empresas públicas, regaladas a capital transnacional, hasta el punto que como lo ha dicho *El Tiempo* recientemente solo quedan 100 empresas estatales por privatizar. En últimas, se impuso la agenda económica de Washington, de tal forma que la economía colombiana se sometió a los requerimientos del capital transnacional, bajo la hegemonía del sector financiero, acentuó la desindustrialización y convirtió al país en un exportador de bienes primarios de tipo mineral.

Ganadores y perdedores con el Plan Colombia

Los Estados Unidos como potencia imperialista son los principales ganadores del Plan Colombia. Así lo ha dicho John Kerry, Secretario de Estado de ese país, quien ha indicado que ese Plan ha sido todo un éxito para ellos. También son triunfadores los miembros del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado y las clases dominantes), que prefirieron feriar la soberanía nacional para mantener la desigualdad estructural de la sociedad colombiana, y para obtener unas

cuantas migajas derivadas de los negocios que entablaron con el imperialismo estadounidense, al garantizar y proteger las inversiones de ese país en nuestro territorio.

Aparte de esos reducidos sectores que se beneficiaron del Plan Colombia, la vasta mayoría de los habitantes de este país han padecido una brutal recolonización. La aplicación del Plan Colombia militarizó la sociedad en una forma extrema, al incrementar el pie de fuerza hasta medio millón de miembros, permitir la intervención de mercenarios, militares y asesores de seguridad de los Estados Unidos, generalizar la idea de que el conflicto armado interno debería terminarse por la vía militar, recurrir a los bombardeos para asesinar a comandantes de la insurgencia, perseguir a quienes fueron declarados como enemigos, instaurar la pena de muerte, replicar un sistema penal inhumano y cruel bajo la orientación de los Estados Unidos.

El bloque de poder contrainsurgente asumió la lógica asesina de contabilizar sus éxitos con el número de muertos del enemigo (la teoría del *body count*, de factura estadounidense, desde la guerra de Vietnam).

El costo humano del Plan Colombia muestra un saldo de terror y destrucción, que no se puede ocultar: 26 mil colombianos muertos en combate, y una cifra similar de muertos de la población civil; desplazamiento forzado de tres millones y medio de campesinos, del total de seis millones que se contabiliza desde 1985; robo de más de un millón de hectáreas por parte de viejos y nuevos terratenientes; fumigación con glifosato, una sustancia cancerígena, en miles de hectáreas de diversas regiones del país; incremento del paramilitarismo, que efectuó masacres y aterrorizó a la población, en alianza directa con las fuerzas armadas y sectores de las clases dominantes; asesinato de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos por el DAS y otros organismos del Estado; cinco mil colombianos asesinados por las fuerzas armadas, en lo que se conoce con el eufemismo de “falsos positivos”; según la ACNUR, en la actualidad 350 mil colombianos están refugiados en el exterior o solicitan asilo por la represión política interna; militares de los Estados Unidos violaron a 54 niñas y jóvenes colombianas en inmediaciones de Melgar y Girardot... Estos datos muestran que para la población colombiana, principalmente del campo, el Plan Colombia ha sido un exitoso programa de muerte.

La “profesionalización” de las tropas colombianas como asesinos en serie no solamente la ha sufrido la población colombiana, sino que ahora aquéllos son una mercancía de exportación. Por eso, los militares colombianos, preparados y adiestrados por los Estados Unidos, hoy son contratados en diversos lugares del mundo, como un ejemplo vergonzoso de exportación de mercenarios.

El Plan Colombia convirtió a las Fuerzas Armadas de Colombia en un sector muy poderoso, que ha manejado a su antojo, y como un botín privado, los recursos económicos de la “ayuda” de Estados Unidos, lo que generalizó la corrupción y el despilfarro. Y la guerra contrainsurgente no logró su objetivo principal: eliminar a las FARC y el ELN, pese a que en ese Plan de Muerte se hayan invertido 130 mil millones de dólares, como lo ha reconocido recientemente el actual Ministro de Defensa, de los cuales Estados Unidos solamente colocó diez mil millones de dólares, aunque seguramente esta cifra es inferior a lo que en realidad invirtió esa potencia.

Conclusión

El campeón del cinismo en estos días ha sido Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, la época de los diálogos en el Caguán, quien ha dicho que el Plan fue exitoso porque obligó a las FARC a sentarse a negociar. Se necesita mucho descaro para decir eso, puesto que en el momento de iniciarse el Plan Colombia, existía una mesa de diálogo con las FARC, que Pastrana rompió a comienzos de 2002. Se requirieron 130 mil millones de dólares, miles de muertos, millones de desplazados, miles de campesinos afectados por la fumigación aérea con glifosato, para que se volviera a dialogar. Tales son los grandes “éxitos” del Plan Colombia, de los que tanto se ufana Andrés Pastrana, cuando en su momento, sin ese derroche de dinero y sin la sangre y el dolor causado desde el 2002 tanto por la injerencia directa de los Estados Unidos -que fueron llamados por los cipayos criollos a que los auxiliara, empezando por Pastrana- como por la acción terrorista del Estado colombiano, se habrían podido llegar a acuerdos que pusieran fin a la guerra, pero que las clases dominantes de Colombia no quisieron, para que no se tocaran de ninguna forma sus

riquezas y se mantuviera como siempre la terrible injusticia y desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana.

El *Washington Post* ha señalado que Colombia sigue siendo el mayor productor de coca en el mundo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concluyó que entre 2013 y 2014 “habían aumentado los cultivos de coca en 44 por ciento y la producción de cocaína en 52 por ciento”. Esto quiere decir, sin muchos giros lingüísticos, que el pretexto de Estados Unidos para emprender su política de recolonización en 1999 se mantiene en el 2016 y por ello, precisamente, se habla de un nuevo Plan Colombia, bautizado con el eufemismo de Plan de Paz. Sí, la paz de los sepulcros, que es con la que siempre ha soñado el bloque de poder contrainsurgente en Colombia y sus amos de los Estados Unidos.

Nota

Publicado en papel en *El Colectivo* (Medellín), No. 5, marzo de 2016.

Renan Vega Cantor - Rebelión

GUATEMALA

EL DIRIGENTE QUICHÉ PEDRO TZICÁ DENUNCIA UNA OFENSIVA DE LOS MACROPROYECTOS MINEROS EN GUATEMALA. “CON LA MINERÍA LLEGA LA REPRESIÓN Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”

Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché. Vive actualmente en la aldea donde nació hace 51 años, Chiul, aunque hace unos días voló rumbo al estado español para impartir varias conferencias. Nada más aterrizar al aeropuerto de Madrid, fue conducido por la policía a una sala donde permaneció, con otros inmigrantes latinoamericanos, tres horas retenido. En Valencia ha participado en un acto organizado por Periferies, Cedsala, Brigadas Internacionales de Paz, Intersindical Valenciana, Acoec, Entrepobles, Cedsala y el Centre Social Terra.

Pedro Tzicá formó parte en su día del colectivo de poblaciones y comunidades de desarraigados en el municipio de Nebaj (Quiché). Su familia tenía tierras, relata, y tuvieron que organizarse al iniciarse la década de los 80 frente a la represión y las masacres que sufrían las comunidades en la zona de Ixcán, fronteriza con México. “Eran los tiempos del general Lucas García, presidente entre 1978 y 1982, cuando los gobiernos militares pretendían hacerse con el petróleo”. Hubo quien se traspasó la frontera, otros formaron comunidades en resistencia y otros, como Pedro Tzicá, se convirtieron en desplazados, sin otra opción más que esconderse de la represión y abandonar las tierras. “El gobierno de Ríos Montt entregó nuestras parcelas a las patrullas civiles o paramilitares”. “Nos fuimos de Ixcán”, recuerda. Cuando a mediados de los 90 se rubricaron los acuerdos de paz, se incluyó un punto sobre reasentamiento de población desarraigada. Era la oportunidad para recuperar las tierras, pero los procesos de reclamación se eternizaron. Hasta el año 2002 no se cumplió el objetivo.

El activista indígena ha vuelto Chiul, a su lugar de origen. Recuerda la guerra como “morir o vivir”, no había más. Hoy continúa siendo campesino, cuenta con algunos terrenos donde cultiva milpa (maíz) y frijol para el autoconsumo. Chiul es una aldea de unos cinco mil habitantes, donde tradicionalmente la población se dedicaba al campo, pero a la que se han sumado en la actualidad muchos profesionales. “Aunque muchos de ellos no tienen empleo”, matiza Pedro Tzicá. Además de campesino, Tzicá es miembro del Consejo de Comunidades de Cunén, constituido por 22 miembros de ocho pequeñas regiones, la gran mayoría de etnia quiché. Las razones para la fundación del consejo en 2008 dan buena cuenta de las amenazas que sufre el municipio. Por informaciones gubernamentales se supo de nueve macroproyectos, que podían terminar con el 80% de las tierras de Cunén. Las comunidades constataron sobre los planos el efecto de estas macroactuaciones, se

organizaron y pidieron al gobierno que se convocara una consulta. “Así nació el Consejo de Comunidades de Cunén”, recuerda el activista.

En la consulta comunitaria organizada por el municipio y celebrada en octubre de 2009, unas 19.000 personas de 80 comunidades se pronunciaron en contra. “Todo el mundo participó y votó en sentido negativo, esto se elevó a acuerdo municipal pero el Estado no reconoció el resultado de la consulta al no considerarla vinculante”, explica el dirigente indígena. Se trataba de parar nueve macroyectos en materia de minería, transporte y energía eléctrica, promovidas por transnacionales y sus filiales guatemaltecas. Pedro Tzicá cita, entre otras, a una empresa de Guatemala, Cementos Progreso, a la canadiense Nichromet, a Fersa, Trecca o Deocsa, adquirida por IC Power. La alarma llegó con las declaraciones del nuevo ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón, quien a primeros de febrero de 2016 reconoció que durante las presidencias de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina no se concedieron nuevas licencias mineras por la oposición popular. Con la excusa de reducir la pobreza, anunció el fin de las moratorias y la agilización de las concesiones. “Ése es el peligro que viene: ahí nos vendrá la represión y la violación de los derechos humanos, se trata de una provocación a la conflictividad”.

Las empresas reclaman seguridad al gobierno para poder desarrollar los megaproyectos. Pedro Quitzá relaciona las palabras del ministro de Energía y Minas con la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Defensa y Gobernación al municipio de Chicamán (Quiché), en la que se comunicó a la población, en una reunión pública, que se requerían medidas de seguridad y un destacamento militar. “La gente dijo que no, porque no estamos en tiempo de guerra”, recuerda el miembro del Consejo de Comunidades de Cunén. “Somos guatemaltecos y conocemos perfectamente las mañas de los gobiernos, sabemos los proyectos que en la zona tienen la eléctrica italiana Enel, la colombiana Trecca, dedicada al transporte de electricidad, y la eléctrica Fersa, además de las mineras en los territorios contiguos”.

La amenaza de que se aceleren las concesiones mineras, expresada por varios ministros del presidente Jimmy Morales, llevó a que el 24 de febrero el Consejo de Comunidades de Cunén, de manera coordinada con el Gobierno Municipal, organizara una asamblea abierta a la participación popular de las 80 comunidades quichés. La asamblea decidió, con el apoyo del Gobierno Municipal de Cunén, que había que fortalecer el consejo y movilizarse para defender los derechos básicos. Pedro Tzicá alerta del gran riesgo que actualmente representan las compañías eléctricas. “Están solicitando derecho de servidumbre de paso, de aproximadamente 24 metros de longitud lineales por cada parcela, con el fin de instalar el cableado de alta tensión; de ese modo las empresas mineras, debidamente “conectadas”, podrán operar”. “Están presionando a la gente para que firme”, agrega. El argumento de presión que utilizan las compañías es que sin los proyectos, el municipio y los vecinos se quedarán sin electricidad, o ésta vería menguada su potencia.

También se les ha dicho que si los cables no pasan por las parcelas, se echarán a perder otros proyectos comunitarios. Los alcaldes –aunque no el actual, matiza Pedro Tzicá– han sido cómplices en la estrategia de presión. Sin embargo, los cables atravesarán tierras de cultivo, aldeas, comunidades, caseríos, calles y áreas urbanas donde viven familias. Hasta el momento, las infraestructuras no se han podido ejecutar por la oposición de las comunidades, aunque “por reclamar nuestros derechos el gobierno nos llama rebeldes”. La situación de Cunén tampoco resulta excepcional en Guatemala. En el Ministerio de Energía y Minas hay actualmente 611 peticiones de licencia relacionadas con minerales (tanto metálicos como no metálicos) y materiales de construcción. Además, el ministerio cifra en 343 las licencias vigentes.

Pedro Tzicá trabaja asimismo en la Iniciativa de Recuperación de la Memoria Histórica (IMH) de los municipios del Quiché, el departamento de Guatemala donde se perpetró el mayor número de masacres durante una guerra civil que, entre 1960 y 1996, se saldó según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y unos 100.000 desplazados. El motivo de la iniciativa, que echó a andar hace aproximadamente una década, se sintetiza de este modo: “Para entender el presente hay que reconstruir el pasado”. Promueven talleres, reuniones de intercambio, platican con compañeros que vivieron la guerra para recomponer los hechos y han editado un libro (“El camino de las palabras de los pueblos”) sobre la memoria histórica del pueblo quiché –el mayor de los pueblos mayas– escrito a muchas manos, a partir de asambleas, del trabajo

en grupo y las historias personales. ¿Qué parte de la memoria habría que priorizar? “Históricamente fue fundamental la resistencia”, explica Pedro Tzicá, “que empezó con la invasión española y continúa hasta hoy”. Añade que la conquista “impuso su religión, su lenguas y costumbres”. Tal vez por ello, reconoce el activista de la aldea de Chiul, “me quede muy poco de la cosmovisión maya”.

Fuente: Enric Llopis. Rebelión

INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN RESISTENCIA OPTAN POR CREAR SU PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA LIBERACIÓN

El 12 y 13 de marzo pasado, en el Municipio de Santo Domingo, Departamento de Suchitepéquez, a 170 Km al Sureste de la ciudad Capital de Guatemala, cerca de 1300 defensores/as, delegas de 580 comunidades en resistencia articuladas en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), provenientes de 98 municipios, de 18 departamentos del país, realizaron su asamblea ordinaria para deliberar sobre el proceso constituyente popular plurinacional, la creación o no de un instrumento político propio y la renovación de su junta directiva nacional.

¿Dónde se realizó la asamblea?

Indígenas mayas (provenientes de los 22 pueblos), xincas y empobrecidos campesinos mestizos, con la presencia de una delegación mixta de capitalinos (autodenominados CODECA urbana), luego de varias horas de viaje arribaron, con sus petates, platos, tazas y cucharas, al cacaotal (predio rústico) donde se llevó acabo la asamblea.

Este pequeño predio rural fue adquirido en su totalidad recientemente con el aporte económico de la mayoría de las comunidades. Cuenta con una galera (tinglado) pequeña y pozo séptico (hecho por los mismos comunitarios).

Allí, bajo los árboles del cacao, rodeados en su totalidad por el monocultivo criminal de la caña de azúcar, las delegadas/os pusieron en común las esperanzas e ideas que traían consigo desde sus comunidades. Sin cámaras de televisión, ni periodistas. Salvo la honrosa excepción de la transmisión por las radios emisoras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FEGER), deliberaron, concertaron y celebraron.

Como ya es costumbre en esta organización, cada comunidad cubrió los gastos de transporte y alimentación en el trayecto de sus delegados/as.

¿A qué acuerdos y compromisos arribaron?

Las y los delegados de las comunidades, si bien ya traían los acuerdos consensuados desde sus comunidades, en la asamblea se reunieron por departamentos, y por unanimidad expusieron y decidieron proseguir con la construcción del proceso constituyente en base a los contenidos construidos y socializados desde CODECA [1].

Para impulsar el proceso de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional decidieron crear un instrumento político propio bajo el control de los movimientos sociales para disputar el poder a los ricos en los procesos electorales, y así posibilitar, en su momento, la realización de la Asamblea Constituyente para la concertación de la nueva Constitución Política. El instrumento político, de ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, se llamará Movimiento Político para la Liberación de los Pueblos

¿Por qué le apuestan al proceso de una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional?

La indígena maya mam, Telma Cabrera, Presidenta de CODECA, graficó en su intervención inaugural las razones del por qué del proceso constituyente, en los siguientes términos:

“Nosotras y nosotros indígenas y campesinos en Guatemala, nunca hemos tenido Estado. Nunca hemos tenido una casa común construida por nosotros mismos. Ahora, Guatemala (Estado) se cae a pedazos (...) Por eso, desde nuestra humildad estamos dispuestos a construir una Casa común y verdadera entre todos y para todos. (...) Aunque truene, llueva o relampaguee, nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, vamos a construir la nueva Guatemala”.

Históricamente, en Guatemala las nueve asambleas constituyentes para la redacción de otras tantas constituciones políticas del país nunca tomaron en cuenta la participación de los sectores excluidos, mucho menos de indígenas y campesinos. Y es más, el Estado ladino emergente de esas constituciones políticas fue y es esencialmente racista, elitista y colonialista con los pueblos. Y, ese Estado bicentenario, en la actualidad, está tocando fondo en sus contradicciones internas infiltrado por el crimen organizado, la corrupción y la injerencia norteamericana.

Por eso, desde la Guatemala profunda, la reserva moral y espiritual del país (indígenas y campesino) está dispuesta a recorrer el postergado camino de la dignidad y de la soberanía que los “ciudadanos plenos” (mestizos), académicos e incluso los revolucionario neoliberales de izquierda le rehúyen.

¿Por qué optan por crear un propio instrumento político?

En los 195 años de vida republicana de Guatemala, los pueblos indígenas y los campesinos jamás tuvieron una organización política propia. Los esfuerzos como el partido político de los trabajadores que nucleó la década de la primavera revolucionaria (1944-1954) jamás asumieron a indígenas y campesinos como sujetos políticos, mucho menos sus agendas históricamente postergadas.

Los actuales reducidos partidos políticos de izquierda tradicional como WINAQ, URNG, Convergencia (ANN), no representan los intereses, ni las agendas de los movimientos sociales como CODECA. Es más, esta izquierda tradicional y neoliberal está en contra del despertar político de los pueblos indígenas y campesinos.

Por eso las comunidades en resistencia emprenden el camino de la resistencia al poder mediante un instrumento político propio.

¿Qué lecciones y aprendizajes deja esta asamblea histórica?

Las y los explotados y despojados por la colonia europea y la actual colonia estatal republicana, desde sus cenizas son capaces de levantarse, aglutinarse y construir caminos libertarios alrededor de una demanda común (el camino constituyente plurinacional), incluso en el corazón mismo de la prepotencia de los monocultivos (cercados por los cuatro lados por la mortal caña de azúcar).

Lo que la clase media, profesionales, ciudadanos, ni izquierda neoliberal, no está dispuesta a hacer por el país, indígenas y campesinos criminalizados y en resistencia están dispuestos a hacerlo para el bienestar de todos.

El empobrecimiento económico o la exclusión cultural/escolar no es un método eficiente para mantener postrado y callado a los pueblos excluidos. Sin mayor cooperación internacional. Fuera de la ciudad principal de las ONGs (Guatemala ciudad), indígenas y campesinos de CODECA hacen historia para correr tras sus añoranzas libertarias.

Así como son muy pocas las veces que presenciamos el momento preciso en el que la semilla sembrada rompe la tierra y se yergue como nueva planta sobre el suelo fecundo, así también son contadas las oportunidades que la historia nos permite observar el instante histórico y geográfico en el que las acumuladas luchas sociales (sembradas y regadas con sangre de mártires) se transforman en conciencia sociopolítica expresada y consensuada en asambleas multitudinaria y festiva. Y, fue esto lo que ocurrió y vimos en la multitudinaria asamblea deliberativa de CODECA.

Fuente: Ollantay Itzamná. Rebelión

AMBIENTALISTA GUATEMALTECO ES ASESINADO EN ATAQUE ARMADO

Sujetos armados sorprendieron al líder comunitario cuando caminaba rumbo a su vivienda. Amigos, familiares e instituciones ambientalistas exigen que el crimen no quede impune.

El ambientalista y líder comunitario, Walter Manfredo Méndez Barrios, de 36 años de edad, fue asesinado este miércoles en la población de Petén, en Guatemala, en un ataque armado cuando se dirigía a su parcela.

El presidente del Frente Petenero contra las Represas, Agustín Tebalam, lamentó la muerte de quien en vida fungió como integrante de su organización y solicitó a las autoridades que el crimen no quede impune.

Exigen protección para ambientalista herido en asesinato de Cáceres:

El hecho ocurrió cuando la víctima caminaba rumbo a su residencia y fue baleado por sujetos que se encontraban ocultos entre unos arbustos, refiere un informe de la Policía Nacional Civil.

El líder fue trasladado de forma inmediata al Hospital Regional de San Benito, pero falleció en el trayecto producto de la gravedad de las heridas.

Indígenas defenderán y continuarán lucha ambientalista de Berta Cáceres:

El asesinato de Méndez, además de generar conmoción, causó el repudio de los pobladores de la zona, instituciones ambientalistas, familiares y amigos.

En contexto:

El 18 de septiembre de 2015, Rigoberto Lima Choc, un líder comunitario y recién electo concejal quinto por la Municipalidad de Sayaxché, en Petén, fue asesinado frente al Juzgado de Paz de esa localidad.

El activista fue uno de los primeros en señalar el caso de contaminación en el río La Pasión.

Resumen Latinoamericano

HONDURAS

OTRO ATENTADO CONTRA INTEGRANTES DE COPINH

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL,
SANTA MARTA.
ADES

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denuncia que en la tarde de hoy, 15 de marzo, fue asesinado Nelson Noé García de la comunidad Río Chiquito en el municipio de Río Lindo, departamento de Cortes, miembro del COPINH.

Desde primeras horas de la mañana, en la comunidad se estaba desarrollando un desalojo violento por parte de la Policía Militar y la Unidad de Élite de la Policía Nacional, los Cobras. Desalojo que ha afectado a 150 familias del pueblo lenca que desde hace 2 años están un proceso de recuperación de tierra, en un país profundamente marcado por la desigualdad en la tenencia de tierras.

Según las primeras informaciones, Nelson Noé fue asesinado frente a su casa con varios balazos a 10 minutos del territorio en disputa. Aunque aún no están claras las dinámicas del crimen.

Además, Copinh Intibucá informa que el comunicador popular Selvin Milla y Sotero Chavarría, ambos miembros de la Coordinación General de la organización, se encuentran en Río Chiquito para auxiliar a las personas heridas y afectadas por el desalojo y que la policía les está amenazando con capturarlos.

Repudiamos el asesinato del compañero Nelson Noé García y nos solidarizamos con su familia, su comunidad y todo el COPINH.

Denunciamos el Gobierno de Honduras y el aparato jurídico y represor del Estado que agraden sistemáticamente a las comunidades del pueblo lenca y a miembros de la organización del COPINH. Acciones que Berta Cáceres denunciaba constantemente sin que hubiera alguna investigación, y que favorecieron el contexto de su asesinato el pasado 3 de marzo.

Exigimos que al Gobierno de Honduras que cumpla con las medidas cautelares de la CIDH (MC 112/2016) de adoptar las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan

desarrollar sus actividades como Defensoras/es de DD.HH., sin ser objetos de actos de violencia, amenaza y hostigamiento.

Llamamos a la solidaridad del pueblo de Cabañas y de El Salvador con las y los compañeros del COPINH y de los pueblos de Honduras en su defensa del territorio y por la soberanía, en sus denuncias y acciones contra la corrupción del Gobierno y de los aparatos estatales, entendiendo que su lucha es nuestra lucha.

"La solidaridad es la ternura de los pueblos"

Caminando con la gente, hacia un futuro mejor

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS: COLABORACIÓN DE FACTO CON EL NARCO

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre las armas decomisadas en la casa de seguridad en la que se ubicó a Joaquín Guzmán Loera, *El Chapo*, en Los Mochis, Sinaloa, en enero pasado, se encontraba un fusil Barret calibre 0.50, que llegó a la delincuencia organizada por medio del operativo Rápido y Furioso, urdido y perpetrado por la dependencia estadounidense responsable del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) a finales de la década pasada, con el supuesto propósito de seguir el rastro al suministro de material bélico desde el país vecino a grupos delictivos mexicanos.

Por principio de cuentas es pertinente recordar que el Barret es un arma mucho más poderosa que los fusiles de asalto AR-15 y AK-47 (cuerno de chivo) habitualmente empleados por las organizaciones criminales; se trata de un rifle de operaciones especiales de gran capacidad de destrucción, de uso regular en diversas fuerzas armadas del mundo – las estadounidenses y las mexicanas, entre ellas – y capaz de neutralizar vehículos con blindaje ligero e incluso de derribar aeronaves en vuelo bajo. Esta sola consideración ilustra el grado de irresponsabilidad de los funcionarios de Washington que organizaron y ejecutaron Rápido y Furioso, y de las instancias legislativas y judiciales – entre ellas, el propio Departamento de Justicia –, que minimizaron la gravedad de esa operación, se abstuvieron de investigar y sancionar a los altos funcionarios involucrados y aseguraron la impunidad de un delito de tráfico de armas cometido en el seno mismo de las instituciones gubernamentales.

Es importante, asimismo, tener en cuenta que esa operación de suministro de armas a la delincuencia fue sólo una de las acciones de colaboración objetiva entre las autoridades estadounidenses y los delincuentes mexicanos. Antes de ella tuvo lugar la maniobra llamada Receptor abierto, de similar diseño, así como movimientos de lavado de dinero propiedad del cártel de Sinaloa por la instancia gubernamental antinarcoóticos del país vecino (DEA, por sus siglas en inglés).

Si a ello se suma la inacción del gobierno del país vecino ante el narcotráfico en su propio territorio, la permeabilidad de una frontera dotada de la más avanzada tecnología de vigilancia y la benevolencia de las dependencias oficiales estadounidenses hacia las instituciones financieras que incurren en lavado de dinero, resulta inevitable concluir que, al margen de discursos e intenciones, Washington ha venido colaborando de facto con el trasiego de drogas. El caso del fusil Barret – y de otros pertrechos de guerra como granadas antitanque y misiles que han sido confiscados a los delincuentes – pone de manifiesto que mientras Estados Unidos ofrecía al gobierno mexicano su colaboración en la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón, se hacía de la vista gorda en el abasto de armas de uso bélico a los grupos criminales y contribuía con ello a la muerte de civiles y militares y a la destrucción del estado de derecho en nuestro territorio.

Ciertamente, el doble juego estadounidense fue correspondido aquí con una desmedida sumisión oficial, que llevó a otorgar a funcionarios del país vecino decisiones trascendentes en materia de seguridad pública. Así fuera por ese solo hecho, hoy, con una visión retrospectiva, es claro que la guerra de Calderón estaba destinada al fracaso y a la pérdida de decenas de miles de vidas desde un primer momento.

Fuente: La Jornada

NICARAGUA

NICARAGUA RECIBE MÁS REMESAS DE ESPAÑA

El ingreso por remesas al país tuvo un crecimiento de 5.1% en 2015, con respecto al 2014, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Informe de Remesas Familiares de 2015.

Ese incremento ha sido impulsado principalmente por un mayor volumen de remesas enviadas desde España, analizó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Según Chamorro, se requiere todo un análisis para entender qué está haciendo crecer el flujo de remesas desde ese país.

Por su parte, el economista y catedrático de la Universidad Centroamericana, Oscar Neira, agregó que ha habido una leve recuperación de la economía de Estados Unidos y Costa Rica, lo que abre más oportunidades de empleos de los nicaragüenses en el exterior.

Las remesas ascendieron a US\$1,193.4 millones en 2015. Es decir, se recibieron US\$57.6 millones más que en el 2014, cuando ingresaron US\$1,135.8 millones al país, asegura el informe.

En montos, las remesas llegaron principalmente de la economía estadounidense. Los ingresos provenientes de ese país crecieron 0.1% en 2015.

Las remesas enviadas desde Costa Rica ascendieron a US\$259.4 millones, o sea, tuvieron un crecimiento de 5.1%, con respecto a 2014 (US\$246.7 millones).

“Las remesas desde Costa Rica se han visto favorecidas por la recuperación del empleo, principalmente en las actividades de construcción y servicios domésticos, las cuales tuvieron crecimientos interanuales de 0.2 y 3.3 por ciento respectivamente, de acuerdo con el reporte de empleo en ese país”, destaca el informe del BCN.

Pero las remesas provenientes de España tuvieron un crecimiento de 34.7%, al pasar de US\$66.9 millones en 2014 a US\$90.1 millones en 2015. Es decir, al país llegaron US\$23.2 millones más provenientes de España en el 2015.

Además, el crecimiento del valor de las remesas enviadas desde España es consistente con el crecimiento del número de transacciones (8.7%) y del monto promedio de las remesas recibidas (US\$295.3), sostiene el informe. En 2014, el monto promedio de las remesas recibidas desde ese país fue de US\$293.1.

De acuerdo con el informe del BCN, Estados Unidos es el emisor del 55.8% de las remesas que recibe Nicaragua; Costa Rica, del 21.7%; España, del 7.5%; Panamá, del 4.5%; México, del 1.4%; El Salvador, del 0.9%, y Canadá, del 0.6%.

Las remesas son una de las principales fuentes de ingresos externos de Nicaragua.

Éstas representaron el 49.3% de las exportaciones de Nicaragua en 2015, que según el banco emisor se establecieron en US\$2,419.4 millones.

Asimismo, las remesas representaron un 9.6% del Producto Interno Bruto del país en 2014.

“Es algo benéfico para las familias nicaragüenses que sus familiares en el exterior les envíen dinero. Recordá que las remesas son nuestro primer producto de exportación, más que el café. Y tiene un significado especial, que es que los pobres ayudan a los pobres”, analizó el catedrático Neira.

Además, destacó que las personas que trabajan en el exterior, aunque pasan por muchas dificultades para ganarse ese dinero, en el país estuvieran en el desempleo.

Fuente: <http://www.elnuevodiario.com.ni/>

PANAMÁ

LAS REFORMAS DE LA PARTIDOCRACIA

‘Cui bono’, locución latina que pregunta ‘¿quién se beneficia?’.

El proyecto de reformas electorales pretende, según los magistrados del Tribunal Electoral, perfeccionar la democracia para lograr una contienda más equitativa. Pero si analizamos el contenido y no las declaraciones de intenciones, queda claro el objetivo es la consolidación del poder de la partidocracia.

Entonces, ¿quién se beneficia de estas reformas electorales? Las cúpulas de los partidos políticos, quienes buscan capturar el Estado para saquear sus recursos y acumular enormes riquezas a costa del pueblo. Y estas cúpulas tienen claro que la única forma de mantener su control sobre el Estado es a través del dinero.

Las reformas mantienen un nivel grosero de financiamiento público (1 % de los ingresos corrientes, aproximadamente 100 millones), de los cuales 60 millones se utilizarán preelectoralmente, y cuya fórmula de repartición destina 56.4 millones a los partidos existentes, dejando la pírrica suma de 2.4 millones para los partidos nuevos y 1.2 millones para los independientes.

Además, al establecer que la propaganda será financiada exclusivamente con esos fondos públicos, han blindado el acceso desigual a los medios. Lo que antes era un gasto privado desigual en propaganda, será ahora un derroche desigual subsidiado por la plata de todos.

Para rematar, los grandes donantes, ahorrándose el costo de propaganda, podrán mantener el control político a un costo inferior, volcando todos sus dineros al clientelismo (que obviamente no reportan). Es una reforma que pone todo el poder y el dinero en manos de los dueños de los partidos.

¿A quién perjudica la reforma electoral? A los ciudadanos que exigimos una política que ponga la vida del ser humano, y no el lucro, como centro y fin de la democracia, que priorice el debate de soluciones a los problemas reales del país y la satisfacción de las necesidades concretas del pueblo.

La partidocracia busca evitar que una opción patriótica, democrática y popular pueda competir en igualdad de condiciones, porque sabe que no puede perder su arma privilegiada: el desigual uso del dinero con el cual corrompe la política y secuestra la democracia.

Una reforma donde el beneficiado fuera el pueblo pondría los recursos públicos directamente al servicio de los electores en vez de a los partidos, invirtiéndolos en la organización de espacios de participación democrática, donde pese más la voz de los ciudadanos y las comunidades que la del empresario y político corruptor, donde todo aspirante a ocupar un puesto de elección popular esté obligado a dar la cara al pueblo.

Esto se logra sacando la plata de la política, prohibiendo el uso del dinero (público o privado) en cualquier forma que dé ventaja a un candidato y posibilite la compra de conciencias, lo que incluye el clientelismo y la propaganda electoral, a ser remplazado por múltiples debates obligatorios entre los candidatos de frente a sus electores en todos los niveles (desde representante hasta presidente) y anuncios informativos en áreas públicas y en los medios, donde se presenten en igualdad de condiciones todas las propuestas, para que sean examinadas y comparadas por los electores.

Hablamos de espacios que les permitan a los ciudadanos conocer, criticar, proponer y deliberar entre sí las propuestas de los candidatos, convirtiéndose el elector en un actor protagónico de la democracia, que a posteriori pueda emitir un voto libre e informado.

Nuestra aspiración debe ser emprender el camino hacia una verdadera democracia, que ponga el poder del lado de los ciudadanos, no de la partidocracia, y donde sean las ideas, y no el dinero, lo que determine el resultado de las elecciones.

Fuente: Richard Morales en <http://filosofiaysociedadpanama.blogspot.com.es/>

VENEZUELA

CRONICAS DE LA VENEZUELA DEL ALIENTO CONTENIDO

La Revolución Bolivariana transita su peor momento, y aun así no está derrotada. Pero la vía para salir de la crisis no parece ser una sola. Y del camino que se tome depende su futuro. El gobierno de Nicolás Maduro se inclina por las soluciones de mediano y largo plazo, pero en la calle hay urgencias inmediatas.

Los severos problemas en el abastecimiento de productos de primera necesidad a precios regulados ya son endémicos. Y desde hace al menos un año impacta especialmente en un área muy delicada: los medicamentos. A la ya conocida ausencia de medicamentos específicos para dolencias crónicas, se suma ahora la ausencia de casi cualquier antibiótico y antialérgicos, entre otros.

Así, los afectados realizan largos peregrinajes por decenas de farmacias y los que tienen la suerte de no atravesar enfermedad alguna, se encomiendan a santos y a paganos, se cuidan y cuidan especialmente a los más pequeños.

La respuesta del gobierno central a este tema que genera profunda preocupación social no está a la altura de la gravedad de la situación. El presidente Nicolás Maduro se ocupó de anunciar personalmente la apertura de una línea telefónica 0-800 para ayudar a la población a ubicar qué farmacias poseen los medicamentos buscados. Pero comunicarse es imposible, al menos durante el día.

¿Qué queda entonces? Recurrir al mercado negro. Al igual que con los alimentos, allí se consigue casi todo, pero a precios viles. Multiplicados cien, mil veces el que figura en la cajita. Un reciente trabajo presentado en el canal estatal Venezolana de Televisión muestra con cabalidad el mecanismo: se llama a teléfonos que aparecen en cadenas de mensajes de texto y en redes sociales, se pauta un encuentro callejero y los medicamentos llegan al consumidor final en contactos furtivos.

Nada furtivos se ve mientras tanto a los buhoneros, tal como se conoce en Venezuela a los vendedores ambulantes. Los que antes vendían ropa, pequeños juguetes, lapiceros o CDs y DVDs “quemados”, ahora se dedican al lucrativo negocio de vender todo aquello que no llega a los supermercados y almacenes. Otra vez el canal estatal mostró al detalle en estos días cómo en zonas del este de Caracas la venta ambulante, antes accesorio, se volvió vital en la vida diaria.

¿En Venezuela hay millones de corruptos y desalmados aprovechadores? No. Claro que no.

Es saludable la aparición de estos trabajos especiales en el canal del Estado, que llegan de la mano de una nueva dirección, compuesta en su mayoría por jóvenes que se formaron en el mismo canal, al igual que el nuevo ministro de Comunicación e Información. Mostrar lo que pasa, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, nunca puede ser perjudicial. Pero el iceberg está, casi todo, debajo del agua.

Y es que las largas y extendidas y perennes colas para comprar productos regulados, los buhoneros que tienen todo lo que falta en los anaqueles, los bachaqueros de medicinas y de todo lo que se pueda trasegar del mercado regulado al negro (desde un antialérgico hasta un auto 0km, pasando por harina, pollo, papel higiénico o pasajes de avión) forman parte de un complejo entramado.

Entramado del que participan no miles sino millones de personas. ¿Entonces en Venezuela hay millones de corruptos y desalmados aprovechadores? No. Claro que no.

Revisemos un caso repetido por millones, el de una ciudadana cualquiera de cualquier barriada de trabajadores que el día que le corresponde según su número de cédula de identidad hace cola para comprar productos esenciales a precios regulados.

Probablemente llegará a hacer cola a las puertas de un establecimiento con el dato más o menos preciso de qué venderán ese día. Aun así, comprará todos los productos regulados que pueda (los más buscados, harina de maíz, mantequilla, aceite, pañales, papel higiénico). Comprará no según lo que necesite sino según lo que haya. Podrá guardar una parte para su consumo y otra la venderá a una red de “intermediarios” que están pululando en el mismo local. Así, obtendrá ingresos adicionales necesarios para comprar los productos que no están regulados (otros alimentos, vestimenta, etc.), a precios castigados por la inflación y la usura.

Sumemos a esta historia infinitas variantes (anotemos también al “profesional” que se dedica a comprar y vender ya no como ocupación anexa sino como eje de su economía), y también a los que trasiegan productos merced a una posición privilegiada (desde los empleados hasta los encargados de los puntos de expendios, los dueños de supermercado, etc.). Y aquí no entramos todavía en la “guerra económica”: las grandes maniobras de desabastecimiento con fines especulativos y políticos, que también las hay, y muchas.

Hay grandes maniobras de desabastecimiento con fines especulativos

Insistimos: se ha montado una red muy difícil de desarmar, y que creció ante la mirada distraída de las autoridades. La “Operación Gorgojo” lanzada por el ministerio del Interior que ya puso tras las rejas a decenas de encargados en distintos niveles de la red de distribución estatal de alimentos demuestra que el Estado sí tiene herramientas para reaccionar si hay decisión política y, a la vez, marca lo complejo de la situación: no es solo la guerra económica, el problema también está adentro y metido hasta los tuétanos.

¿Y la oposición? Entre el revocatorio y la enmienda

Mientras la preocupación crece y la paciencia del venezolano y la venezolana de a pie se estira hasta límites insospechados, la oposición sigue jugando al juego que más le gusta (o tal vez sea el único que saben jugar): reclamar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Es que hasta aquí la estrategia de montarse sobre la crisis no le ha dado malos resultados a la oposición. Por el contrario, aupados en el sistema de representación parlamentaria venezolano que otorga una importante sobrerrepresentación a la mayoría, se hicieron del control absoluto de la Asamblea Nacional y desde allí dirigen una acción en tres frentes: avanzan con leyes restauradoras; avivan el fuego de la pelea entre poderes del Estado y azuzan la salida del Presidente.

En ninguno de los tres frentes tienen el éxito asegurado. Es más, hasta ahora, no han obtenido victorias. Al cierre de esta nota se esperaba que la oposición definiera una estrategia para un cese “constitucional” del mandato de Nicolás Maduro, habida cuenta del fracaso de la violencia callejera promovida para “La Salida” en 2014. Las estrategias se reducen a dos: el revocatorio de mandato (promovida por el gobernador de Miranda y referente opositor Henrique Capriles) y la enmienda constitucional para acortar el período presidencial (promovida por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup).

Ninguna de las dos opciones es simple. La primera -revocatorio- demanda una campaña de avales (20 por ciento del registro electoral de más de 19 millones de votantes), luego una elección por el sí que debe ganar no por un porcentaje sino por más de 7.587.579 votos, que es la suma de los votos que obtuvo Nicolás Maduro en abril de 2013 y aún superado este duro escollo (todos en la oposición saben que no tienen ese piso asegurado) deberían ganar una elección presidencial sobrevenida frente a un chavismo que hasta aquí ha demostrado que sabe unirse en los retos electorales a todo o nada. Además, si el revocatorio no se realiza antes del 10 de enero de 2017 y aún con Maduro revocado, le correspondería asumir el gobierno al vicepresidente ejecutivo (hoy el veterano dirigente chavista Aristóbulo Istúriz), para completar el mandato hasta el 10 de enero de 2019. Es decir, el revocatorio es la vía constitucional para que la oposición cumpla su sueño de salir de Maduro, pero no tienen garantizada la victoria.

Por eso, otros en la oposición se decantan por la enmienda constitucional, promovida por la Asamblea Nacional. En ese escenario sólo se necesita una aprobación de una ley de enmienda, que debe llevarse a referéndum popular, que se decide por mayoría simple de los votantes. Así, podría llevarse a referéndum una enmienda para acortar el mandato presidencial (de seis a cuatro años) con una cláusula especial y transitoria, para aplicar el acortamiento también al período vigente.

Pero en este escenario una eventual victoria del Sí a la enmienda es apenas el comienzo de la disputa. Es que los constitucionalistas advierten que una enmienda es perfectamente viable para un mandato futuro, pero no para el vigente, ya que el presidente en funciones fue elegido por voto popular para un período determinado (en el caso de Maduro, para completar el mandato de Hugo Chávez, que comenzó el 10 de enero de 2013 y termina el mismo día de 2019).

Allí la última palabra la tendría la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya ha mostrado no estar dispuesta a darle respiro a la Asamblea Nacional opositora.

Así, los más pragmáticos en la Mesa de la Unidad Democrática saben que la única "salida" posible a corto plazo pasa porque la crisis económica siga socavando la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro en sus propias bases. Que los casi tres millones que en 2012 votaron a Chávez pero que faltaron a las urnas en diciembre pasado comiencen a asumir un rol más activo (electoralmente hablando) contra el chavismo, azuzados no por un discurso opositor que no les permea, sino por el avance de la crisis y la incertidumbre por su resolución.

Todas las cartas están sobre la mesa y la solución es de política económica. Y allí, como en todo, los caminos son varios, y profundamente divergentes. En esos senderos divergentes hay en juego más que la continuidad del presidente Maduro. Es la continuidad o no de la Revolución Bolivariana.

Marcos Salgado (Periodista argentino, editor de Questiondigital.com, corresponsal de Hispantv en Caracas.)

Fuente: <http://www.alainet.org/es/articulo/175767>